

Movimientos populares-electorales

La ola de movilizaciones populares a las que se refiere este texto transcurrió en un período muy preciso: del 14 de junio al 25 de noviembre de 2006. Todo empezó cuando el gobierno estatal intentó desalojar violentamente a los miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que mantenían ocupada la plaza central de Oaxaca. Hasta ese día, las protestas habían evolucionado como normalmente lo hacen en ese estado mexicano alrededor del 15 de mayo, día del maestro. Las manifestaciones públicas acostumbradas, las usuales declaraciones contra el gobierno federal y estatal, las mismas protestas contra la dirigencia nacional del sindicato... los maestros ponían en acción su habitual repertorio de acciones contenciosas,² con la demanda de siempre, tan justificada como monótona: el aumento salarial.³

Después del 14 de junio, la situación cambió radicalmente: se agregaron nuevos actores (especialmente la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO), se radicalizaron las demandas (entre las que ocupó un lugar destacado la destitución del

¹ Doctor en ciencia política por la Universidad de Boston y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus principales áreas de investigación son la política comparada y la teoría política. Es autor de dos libros: *Insurgency, Authoritarianism, and Drug Trafficking in Mexico's "Democratization"* (Nueva York: Routledge, 2005) y *El debate actual sobre el federalismo mexicano* (México: Instituto Mora, 1999). Correo electrónico: jose.velasco@servidor.unam.mx

² El uso del término "contencioso" para referirse a los movimientos sociales es corriente en la literatura sobre el tema. Para una buena definición y un análisis sugerente sobre sus implicaciones para la democracia, véase Tilly, 2003.

³ Sin embargo, como se explica adelante, esta vez la demanda parecía más fácil de satisfacer.

gobernador Ulises Ruiz); pero, sobre todo, el movimiento se vinculó íntimamente con el proceso electoral que culminó en la cuestionada elección de Felipe Calderón como nuevo presidente de la república. A partir de entonces, las protestas se combinaron de formas intrincadas, muchas veces contradictorias pero casi siempre decisivas, con las alianzas y conflictos entre candidatos, partidos y autoridades. Esta situación duró prácticamente hasta la inauguración de la nueva administración federal. El 25 de noviembre, el gobierno federal cambió bruscamente de estrategia, abandonó su actitud ambigua hacia las protestas y comenzó a realizar detenciones masivas de simpatizantes y líderes de la APPO. Las movilizaciones continuaron, pero perdieron intensidad y visibilidad y parecieron encaminarse a un período de latencia, más o menos activo. Un nuevo ciclo de protestas populares había terminado, dejando tras de sí más de veinte asesinatos, centenares de detenidos y heridos, numerosas violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, muchas demandas sociales insatisfechas a la espera de una nueva oportunidad para ganar notoriedad.⁴

Las movilizaciones de Oaxaca fueron sólo la parte más duradera e intensa del ciclo de movilizaciones populares-electorales de 2006. En realidad, el ciclo comenzó a principios de ese año con las huelgas de mineros, que alcanzaron su momento más dramático el 20 de abril. Ese día, policías federales y estatales intentaron, infructuosamente, desalojar a los trabajadores que ocupaban una mina en Lázaro Cárdenas, Michoacán, matando a dos trabajadores e hiriendo a varios más. El siguiente

⁴ En su informe sobre el conflicto, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH, 2007a, 95; 2007b) documenta con detalle 26 asesinatos. La oficial Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2007) registró 20 asesinatos (11 “en situaciones directamente relacionadas con los hechos que se investigan y 9 de manera indirecta”), 366 detenidos y 381 lesionados. El informe de la CNDH, sin embargo, se concentra en los hechos ocurridos en la Ciudad de Oaxaca, mientras que el de la CCIODH se refiere a todo el estado.

episodio sucedió a principios de mayo y de nuevo estuvo asociado a un hecho violento: la represión al Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en el Estado de México. Parte de este contexto fue también la “Otra Campaña”, organizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo líder recorrió gran parte del país en una campaña política opuesta a la que desarrollaban los candidatos presidenciales.

Los “movimientos populares-electorales” —protestas sociales marcadas decisivamente por su combinación con la competencia electoral— surgieron en el país cuando las elecciones presidenciales se volvieron realmente competitivas. En 1994 el protagonista fue el EZLN; cinco años después le tocó al Consejo General de Huelga (CGH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Estos movimientos comparten varias características distintivas. Ocurren precisamente cuando el régimen político es más vulnerable y las relaciones entre los miembros de la élite están más enrarecidas que de costumbre. Los candidatos y partidos intentan, con cierto éxito, manipularlos y usarlos para sus propios fines electorales, con la esperanza de que las protestas debiliten a sus adversarios o por lo menos los obliguen a distraer su atención. Gracias a esto, los movimientos adquieren mayor visibilidad de la que lograrían en otras circunstancias, lo cual los estimula a radicalizar sus acciones y a multiplicar sus exigencias. Las autoridades responden a ellos de forma ambigua: se resisten a buscar una salida negociada que atienda sus causas fundamentales, pero no se arriesgan a usar la fuerza pública para reprimirlos abiertamente y a veces prefieren tolerarlos o incluso apoyarlos tácitamente. Al final, cuando el gobierno siente que ha pasado el período crítico, siempre toma una medida más o menos drástica: la acción militar contra el EZLN

en febrero de 1995, cuando el nuevo presidente ya estaba firmemente ubicado en el poder; la entrada de la Policía Federal Preventiva (PFP) a la Ciudad Universitaria en febrero de 2000, una vez que había terminado la disputa por la candidatura presidencial del entonces partido oficial (Partido Revolucionario Institucional, PRI); la captura de líderes y miembros de la APPO justo antes y después de la toma de posesión de Felipe Calderón en 2006.

Al observar estos movimientos, es importante recordar que cada uno de ellos tuvo sus características peculiares, muchas de las cuales tienen poco que ver con la manera en que se articularon con los procesos electorales. Pero verlos como movimientos populares-electorales, como especies diferentes de un mismo género, permite destacar no sólo sus rasgos comunes, sino también los cambios más importantes que han ocurrido de un ciclo a otro. Dichos cambios son producto, sobre todo, de la evolución de las demandas sociales y de las transformaciones del régimen político.

La movilización de 1994, con mucho la más importante de los tres ciclos mencionados, ocurrió cuando el régimen electoral todavía no había producido su fruto más espectacular: arrebatarse al PRI el monopolio de la presidencia de la república. El escepticismo hacia la competencia electoral era fácilmente comprensible, especialmente porque la elección presidencial previa había estado manchada por el fraude. Al mismo tiempo, el cambio político a través de las elecciones era todavía una promesa. Su capacidad para producir un gobierno sensible a las demandas populares aún no había sido probada en la práctica. La movilización de 1999-2000 tuvo una fuerza mucho menor que las otras dos y terminó poco después de que comenzara el proceso electoral propiamente dicho. La característica distintiva del movimiento oaxaqueño, comparado con esos casos

previos, fue que ocurrió cuando el régimen electoral competitivo era ya una realidad: la desilusión, más que el escepticismo, fue su actitud dominante hacia el proceso electoral. La lucha social y la competencia electoral no sólo parecieron diferentes sino contrapuestas, aunque complejamente conectadas entre sí.

Causas del movimiento

Quien quiera saber por qué el movimiento estalló o se agudizó en el momento en que lo hizo, por qué los acontecimientos se sucedieron de una forma peculiar, por qué éstos ocurrieron en ciertos lugares precisos, etc., deberá tomar en cuenta una gran cantidad de circunstancias irrepetibles, muchas de ellas accidentales, entre las que destacan la personalidad de los dirigentes, las peripecias de la competencia electoral, las decisiones equivocadas del gobernador del estado. Son ellas las causas inmediatas del movimiento, las que le dieron su identidad irrepetible. Pero, por sí mismas, no responden una serie de interrogantes más básicas: por qué surgió el movimiento, por qué un número relativamente grande de ciudadanos se sumó a una confrontación riesgosa y extenuante; cómo se crearon las oportunidades que los dirigentes del movimiento aprovecharon para darle mayor fuerza y visibilidad a sus protestas; por qué, pese a sus acciones espectaculares, el movimiento no superó las debilidades que lo hicieron tan vulnerable una vez que el gobierno decidió atacarlo frontalmente; por qué, en fin, el movimiento fue capaz de sobrevivir, así fuera en estado latente, una vez que pasó la coyuntura favorable. Para responder estas preguntas es necesario considerar otros datos.⁵

⁵ Con su elocuencia habitual, Tocqueville (1986, 762) planteó así la distinción entre causas “segundas” y “primeras”: “El azar, o más bien ese encadenamiento de causas segundas que nosotros llamamos así por nuestra incapacidad para desentrañarlas, juega un papel muy importante en todo lo que observamos en el teatro del mundo. Pero yo creo que el azar no hace nada que no haya sido preparado previamente. Los hechos anteriores, la naturaleza de las instituciones, los cambios en los espíritus, el estado de las

Los primeros, los más obvios y tal vez por lo mismo los más fáciles de ignorar, son las carencias sociales que afectan a una parte considerable de la población oaxaqueña. Las frustraciones creadas por estas carencias, los deseos de superarlas, los temores que estos deseos inspiran a quienes se benefician de ellas son fundamentales para explicar el surgimiento del conflicto y el nivel de virulencia que alcanzó. Oaxaca, junto con Chiapas y Guerrero, ocupa los peores lugares en indicadores de bienestar social en México. Es el tercer estado con mayor nivel de marginación, definida según métodos oficiales tomando en cuenta una serie de datos sobre educación, vivienda, salario, etc. (CONAPO, 2001). Oaxaca es el estado con mayor porcentaje de población indígena: 35 % de sus habitantes hablan alguna lengua indígena, comparado con el 6.7 % en todo el país (INEGI, 2005). Este dato es importante por la estrecha relación entre población indígena y pobreza: de los 346 municipios indígenas en todo el país,⁶ 342 tienen marginación alta o muy alta. En otras palabras, ser miembro de un municipio predominantemente indígena prácticamente equivale a vivir en alta o muy alta marginación. Correlativamente, de los 386 municipios con marginación muy alta en todo el país, 209 (54%) tienen población predominantemente indígena; lo cual significa que más de la mitad de los municipios con marginación muy alta en el país son indígenas.⁷ Oaxaca es también el estado con mayor porcentaje de población rural (53%), un dato importante si se toma en cuenta la incidencia de la pobreza en el medio rural, que prácticamente duplica a la urbana tanto en extensión como en intensidad (INEGI, 2005).⁸

costumbres, son los materiales con los que se componen esas improvisaciones que nos sorprenden y espantan”.

⁶ Es decir, los municipios cuya población indígena es igual o superior a 70%

⁷ Estas comparaciones se basan en datos tomados de CONAPO (2001, 49-52).

⁸ Según estimaciones oficiales, 62% por ciento de la población rural es pobre, comparada con 38% de la urbana. La “pobreza alimentaria”, la más intensa, afecta a 32% de la población rural y a 10 % de la urbana (CONEVAL 2006, 3-4).

En síntesis, Oaxaca concentra, de forma especialmente aguda, las carencias que afectan a varios sectores de la población mexicana.

La penuria socioeconómica puede producir frustración y resentimiento, pero por sí sola no necesariamente genera movilizaciones duraderas. Como lo dijo un famoso revolucionario, “la existencia de privaciones no es suficiente para producir una insurrección; si lo fuera, las masas siempre estarían en revuelta” (Trotsky, 1980, 495). Por lo tanto, es necesario también fijarse en las estructuras e instituciones políticas, especialmente en su solidez y legitimidad. El primer dato importante sobre este punto es la situación del gobierno estatal. Ulises Ruiz, cuya destitución como gobernador se volvió la principal demanda del movimiento, fue electo en agosto de 2004, luego de una difícil competencia. Según las cifras oficiales, la diferencia entre Ruiz (postulado por el PRI, con el apoyo de dos partidos menores) y su principal competidor fue equivalente al 2.6 % de los votos emitidos. Sin embargo, esta ventaja, pequeña pero clara,⁹ fue opacada por dos problemas. El primero fue la baja participación electoral: sólo el 46% de los ciudadanos registrados ejerció su derecho al voto.¹⁰

Más importante, o por lo menos más visible, parece haber sido el segundo problema: la poderosa élite política oaxaqueña, que hasta la fecha ha asegurado al PRI el control del gobierno estatal, llegó dividida a las elecciones de 2004. Una fracción de la misma, aliada al entonces presidente del partido y futuro candidato presidencial Roberto Madrazo y dirigida por el gobernador saliente José Murat, apoyó a Ulises Ruiz. Otra fracción muy importante, dirigida por el ex gobernador Diódoro Carrasco, promovió la

⁹ En contraste, la diferencia entre los dos principales candidatos en la elección presidencial de 2006 fue menor a 0.6%.

¹⁰ Los resultados oficiales están disponibles en:

http://www.imocorp.com.mx/CAMPO/ZSIEM/ELEC_X_ANIO/RESULTADOSWEB.ASP?IDELECCION=59431

candidatura de Gabino Cué. Postulado por una inusual alianza entre el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cué fue además apoyado por la entonces secretaria general del PRI y jefa del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo. También tuvo el evidente respaldo de la presidencia de la república.

En suma, con una baja participación ciudadana como trasfondo, en la competencia entre Ulises Ruiz y Gabino Cué se concentraron varias tensiones políticas: entre dos sectores de la élite política oaxaqueña, entre las dos corrientes principales del PRI, entre los dos principales partidos del estado (el PRI y el PRD), entre el gobierno del estado y la presidencia de la república, entre el PAN y la principal fracción del PRI.

Después de su triunfo, Ulises Ruiz siguió enfrentando un contexto adverso. Todas las fuerzas que apoyaron a su rival siguieron oponiéndose a su gobierno. Pero esta oposición se dividió en dos grupos. Por un lado quedó lo que se podría llamar el bloque ex priísta, dirigido por Elba Esther Gordillo y Diódoro Carrasco, con el apoyo del PAN y por lo menos la simpatía del presidente de la república. El otro bloque quedó conformado por el principal partido de oposición en el estado, el PRD.

En ese contexto se ubicó la decisión del gobernador Ulises Ruiz de reprimir el movimiento de los maestros el 14 de junio de 2006. El grupo de Gordillo y Carrasco estaba aprovechando las protestas de la Sección 22 para debilitar al gobernador.¹¹ Este, al atacar a los maestros, al parecer se proponía agudizar el conflicto, poner al presidente de la república frente a un hecho consumado y obligarlo a mandar fuerzas federales a

¹¹ Roberto Madrazo se refirió así al conflicto: “No es casual que todo lo que está pasando, como el movimiento magisterial en Oaxaca, se esté dando donde más afecta al PRI, donde más se golpea a nuestra organización” (*El Universal*, 22 de junio de 2006). También se hizo famosa su frase de que el problema de Oaxaca tenía “aroma de mujer”, en clara alusión a Elba Esther Gordillo.

Oaxaca. Dos hechos parecían respaldar el optimismo del gobernador. En la represión a los mineros de Lázaro Cárdenas y a los habitantes de Atenco habían actuado conjuntamente la policía federal y las policías estatales de Michoacán y el Estado de México, aun cuando los respectivos gobernadores procedían de partidos distintos al del presidente (PRD y PRI, respectivamente). Además, puesto que las elecciones presidenciales estaban a poco más de dos semanas de realizarse, parecía difícil que el gobierno federal quisiera tolerar que un estado de la república se encontrara envuelto en un conflicto social serio.

Pero para el gobierno federal, enviar a su policía a Oaxaca habría significado respaldar al gobernador Ruiz, lo cual habría puesto en riesgo la alianza entre el presidente y el grupo de Gordillo y Carrasco. Esto habría debilitado al candidato presidencial panista, Felipe Calderón, y habría beneficiado al candidato priísta Roberto Madrazo. Pero sobre todo, de forma indirecta, habría fortalecido al principal rival de Calderón, el perredista Andrés Manuel López Obrador. No es extraño, por lo tanto, que después de algunas vacilaciones el gobierno federal se negara a respaldar al gobernador.

Dos días después del fallido desalojo a los maestros, una “megamarcha” en la que participaron más de cien mil personas paralizó la capital del estado, exigiendo la renuncia o destitución de Ulises Ruiz. Dos días después surgió la organización que protagonizaría el conflicto oaxaqueño durante los siguientes meses, la APPO.

Del movimiento magisterial a la APPO

Las carencias socioeconómicas hicieron necesarias las protestas, por lo menos para un sector importante de la sociedad oaxaqueña. El bajo nivel de respaldo popular al gobierno estatal y las pugnas de la élite política proveyeron la oportunidad para que el movimiento

se desarrollara. Pero el factor activo, el que materializó estas potencialidades, fue el intenso trabajo organizativo que diferentes grupos habían estado realizando en el estado.

La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca fue creada precisamente para aprovechar estas oportunidades. La represión a los maestros fue la ocasión propicia para que se unieran grupos diversos, muchas veces contrapuestos, que por años habían estado operando en el estado. Anarquistas, organizaciones indígenas, defensores de derechos humanos, marxistas, estalinistas... una gran diversidad de grupos políticos y sociales de izquierda confluyeron en el movimiento.¹² Formalmente, fueron 365 organizaciones las que constituyeron la APPO. Pero en un mundo tan fluido, con organizaciones que surgen y se disuelven frecuentemente, el factor crítico es la existencia de un núcleo suficientemente numeroso de líderes y militantes de nivel medio que le dan continuidad al trabajo organizativo y a la agitación política. Mencionar brevemente a algunos de los líderes y organizaciones participantes puede ilustrar muy bien la diversidad de fuerzas que se agrupó en la APPO.

En parte gracias a la polémica personalidad de su principal líder pero también debido a su amplia aunque volátil masa de simpatizantes, la organización Nueva Izquierda Oaxaqueña (NIOAX) es un caso muy ilustrativo. El dirigente en cuestión es Flavio Sosa Villavicencio. De origen humilde y con una larga experiencia como luchador social, Sosa fue uno de los fundadores del PRD en Oaxaca y diputado federal por ese partido en la LVI legislatura (1994-1997). En el año 2000 renunció a su partido y apoyó al candidato presidencial del PAN Vicente Fox. Posteriormente, fundó o se sumó a varias

¹² En palabras de la propia APPO (2006a): “Durante años los cientos de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, ONG’s, ecologistas, de género, estudiantiles, sindicales, etc., las comunidades indígenas, los miles de oaxaqueños que creíamos en la necesidad de un verdadero cambio, buscamos siempre constituir un proceso de unidad... que por diferentes razones no se había dado, hasta ese día [el 14 de junio]”. Véase también Bautista Martínez, 2006.

organizaciones populares. Se le acusó de colaborar con el gobernador José Murat y de promover la división de la oposición al apoyar al candidato de un partido local en las elecciones para gobernador en 2004;¹³ pero en 2005 se reintegró al PRD. Durante las movilizaciones de 2006, su organización, NIOAX, tenía numerosos simpatizantes en los barrios marginales de la ciudad de Oaxaca. Muchos de los jóvenes de la APPO que se enfrentaron con mayor combatividad a la policía local o federal eran miembros o simpatizantes de esa organización. Entre junio y noviembre, las oficinas de NIOAX fueron atacadas e incendiadas dos veces. Sosa fue capturado el 4 de diciembre en la Ciudad de México, por policías federales, mientras se preparaba para acudir a una reunión con la Secretaría de Gobernación.¹⁴

En contraste con NIOAX, el Frente Popular Revolucionario (FPR), otro de los principales miembros de la APPO, es mucho más ideológico y estructurado. Es una organización nacional, con importante presencia en Oaxaca, creada a principios de esta década por el Partido Comunista de México Marxista-Leninista (PCMml), que se declara heredero de Marx, Engels, Lenin, Stalin y el albanés Enver Hoxha. El FPR (s/f) se describe como “una organización amplia, de masas, democrática, asambleísta, de clase, revolucionaria, internacionalista, independiente del gobierno, del estado y de los partidos políticos burgueses y pequeño burgueses”. Su objetivo es “la construcción de un gobierno provisional revolucionario que sea el germen de un gobierno de obreros y campesinos pobres”. Varios de los dirigentes más prominentes de la APPO provenían del FPR, entre

¹³ El candidato en cuestión, Héctor Sánchez (postulado por el Partido Unidad Popular), obtuvo el 4.3% de la votación total.

¹⁴ Esta breve descripción de NIOAX y Flavio Sosa se basa en la revisión de numerosas notas periodísticas publicadas durante los meses del conflicto y especialmente luego de la detención de Sosa. El Diario de los Debates de la Cámara de Diputados (Legislatura LVI, Año III, Primer Periodo Ordinario, Diario 3) del 4 de septiembre de 1996 registra una extensa e interesante intervención del diputado Sosa “sobre el clima de violencia existente en el Estado de Oaxaca”.

ellos Zenén Bravo, un experimentado dirigente magisterial, y Florentino López, quien fungió como vocero del movimiento. Además del FPR, también se distinguió en el movimiento oaxaqueño, especialmente en el sector estudiantil, otro organismo creado por el PCMml: la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM, s/f).

Los indígenas tuvieron una participación destacada en el movimiento. Junto con los maestros, fueron quienes más contribuyeron a extenderlo a todo el estado. Los indígenas oaxaqueños tienen una historia muy combativa y una fuerte tradición de organización comunitaria. En 2004, 418 de los 570 municipios del estado eligieron a sus autoridades según el sistema de usos y costumbres, es decir independientemente de los partidos políticos.¹⁵ De hecho, Oaxaca fue un estado pionero en la adopción de métodos electorales consuetudinarios para los municipios predominantemente indígenas (López Bárcenas, 2005). Una gran cantidad de organizaciones indígenas, combinadas en redes con otras organizaciones del estado, de otros estados e incluso de otros países, participaron en la APPO. Entre ellas estaban las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), el Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente (MULTI), el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO), el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI). La mayoría de estas organizaciones estuvieron o están asociadas al movimiento indígena generado alrededor del EZLN; varias de ellas, a la vez que participaban en la APPO, apoyaban también a la Otra Campaña, convocada por los zapatistas. Juntas conformaron uno de los sectores más combativos de la APPO, el más reacio a tratar con los partidos políticos y a involucrarse en los procesos electorales (de Castro Sánchez, 2007).

¹⁵ Sobre este punto, ver <http://www.usosycostumbres.org/2004.htm>

Los maestros, como gremio, nunca fueron miembros sino simplemente aliados de la APPO. Agrupados en la Sección 22, los profesores oaxaqueños han mantenido por casi treinta años una posición independiente frente a la dirigencia nacional del SNTE. En 2006, incluso en los momentos de mayor polarización y confusión, el movimiento magisterial mantuvo firmemente su demanda original, al punto de casi excluir cualquier otra: la “rezonificación”, es decir, la inclusión de los maestros oaxaqueños en la categoría salarial 3, que teóricamente se aplica en las zonas más caras del país pero que en la práctica ha servido para pagar menos a los trabajadores de las zonas supuestamente baratas.¹⁶ Fue esa la demanda que los llevó a declararse en paro indefinido el 22 de mayo. Con una breve reanudación en julio, las clases estuvieron suspendidas en casi todo el estado hasta mediados de noviembre. Debido a su preocupación predominante por demandas gremiales, el movimiento magisterial tuvo varios desencuentros con la APPO.¹⁷ No obstante, muchos dirigentes y cuadros medios del movimiento magisterial participaban también en las organizaciones de la APPO. Casi la mitad de las 26 personas asesinadas que reporta CCIODH (2007a, 95; 2007b) pertenecían o estaban “directamente vinculados” a la Sección 22. A mediados de marzo de 2007, todavía permanecían en prisión 47 profesores.¹⁸

Incluso los líderes más radicales de la APPO siempre se deslindaron de las organizaciones armadas. Sin embargo, varios grupos guerrilleros (la mayoría de ellos

¹⁶ En octubre, la Sección 22 y la Secretaría de Gobernación acordaron un plan para lograr paulatinamente la rezonificación. Pero en marzo de 2007, todavía no se habían entregado los fondos acordados. Ver *La Jornada*, 14 de marzo de 2007.

¹⁷ En parte, la actitud prudente que asumió la dirigencia de la Sección 22 se debió a su deseo de evitar que la dirigencia nacional del SNTE aprovechara la crisis para dividir al magisterio de Oaxaca. El riesgo se materializó con la creación, a finales de diciembre, de una nueva sección sindical (la 59) con profesores afines a Elba Esther Gordillo. Esto generó múltiples enfrentamientos entre los miembros de ambas secciones.

¹⁸ Ver *La Jornada* 14 de marzo de 2007

provenientes del Ejército Popular Revolucionario, EPR) se declararon a favor del movimiento. El hecho más dramático ocurrió el 6 de noviembre, cuando seis artefactos explosivos estallaron en tres puntos de la Ciudad de México (las oficinas del Tribunal Electoral, la sede nacional del PRI y la sucursal de un banco). Según el comunicado de las cinco organizaciones que se atribuyeron los atentados, éstos fueron realizados en solidaridad con el pueblo de Oaxaca y, en especial, contra la entrada de fuerzas federales a la ciudad (TDR-EP, 2006).

La destitución de Ulises Ruiz fue la demanda que permitió articular esta diversidad de organizaciones y corrientes. Tenía varias ventajas importantes: era algo en lo que podían coincidir todas las organizaciones participantes en la Asamblea, era percibida como legítima por importantes sectores sociales del estado (especialmente después del desproporcionado ataque a los maestros) y parecía una demanda realizable, dadas las divisiones de la élite política. Además, esa demanda podía ser vista como un paso muy importante en la lucha por otras de mayor contenido social o político: la autonomía de los pueblos indígenas, los beneficios sociales y económicos para los grupos urbanos marginales, la generalización de formas más participativas y combativas de participación política para los sectores bajos, etc. El lema de la APPO, “todo el poder al pueblo”, es sumamente revelador en este sentido.

Las acciones típicas de la APPO fueron las manifestaciones públicas, entre las cuales destacan las siete “megamarchas” realizadas entre el 16 de junio y el 25 de noviembre. Otra acción característica fue el establecimiento de barricadas en varios puntos de la ciudad, especialmente en el centro y en los principales accesos. Las barricadas permanecieron prácticamente durante todo el período mencionado y fueron

parte del intento de la APPO por mantener “tomada” la ciudad. El movimiento fue muy creativo en sus luchas callejeras: además de las acostumbradas piedras y bombas molotov, utilizó de forma muy eficaz otras armas menos comunes (pero inspiradas en las tradiciones populares) como los petardos y, especialmente, las bazucas caseras.¹⁹ Las frecuentes asambleas (locales, regionales, estatales) fueron a la vez un recurso organizativo y un arma de lucha; fueron también una forma de vincular el movimiento con las prácticas organizativas de los maestros y de las comunidades indígenas. Además, como una forma de darle proyección nacional a sus protestas, la APPO realizó una marcha caravana hacia la ciudad de México, que se mantuvo ahí por varias semanas. La radio fue otro elemento importante, especialmente “Radio Plantón” y “Radio Universidad”, aunque por un tiempo el movimiento también ocupó y utilizó las instalaciones de varias radiodifusoras comerciales.

Durante los meses más álgidos del conflicto, de mediados junio a principios de noviembre, la APPO operó con una dirigencia provisional, muy visible pero con atribuciones formales muy limitadas. Eso en parte representó un intento consciente por retomar las formas organizativas de los pueblos oaxaqueños, especialmente las de las comunidades indígenas. Pero también se debió a una razón más pragmática. Dada la pluralidad de grupos que se integraron a la APPO, la diversidad de sus demandas y las diferencias entre sus líderes, una organización centralizada y vertical difícilmente hubiera podido prosperar. No fue sino hasta mediados de noviembre (del 11 al 13) que se realizó el Congreso Constitutivo, de donde surgió una dirigencia más formal (el Consejo Estatal) y se elaboraron los documentos programáticos de la APPO (Regino, 2006; APPO, 2006b). Para ese entonces, el movimiento se acercaba a su momento más crítico.

¹⁹ Para una rápida y sugerente descripción de estos métodos, véase Vergara et al, 2007.

Como ya se mencionó, la cercanía de las elecciones presidenciales facilitó el surgimiento de la APPO. Pero esta vez la competencia electoral no terminó después de que se realizaron los comicios, el 2 de julio. Transcurrieron dos meses —marcados por la incertidumbre, los alegatos de fraude, y las protestas organizadas por el ex candidato del PRD López Obrador— antes de que el Tribunal Electoral diera por válidas las elecciones y reconociera el triunfo del panista Felipe Calderón. Pero ni siquiera eso cerró el período de competencia, pues López Obrador pronto dio a conocer su intención de declararse “presidente legítimo” y dificultar la toma de posesión de Calderón. En este ambiente convulsionado, la APPO encontró nuevas oportunidades para mantenerse viva y beligerante.

Sería arduo describir con detalle las maniobras entre las diferentes fuerzas políticas durante este período. En realidad, basta con describir las principales posiciones en términos generales. La del gobernador Ruiz fue muy consistente: movilizar a los grupos sociales que le eran afines y conseguir el apoyo del gobierno federal para derrotar a la APPO. Aunque menos consistente, la posición del PRD y su candidato presidencial también se mantuvo sin cambios en lo esencial: sin alienarse a la APPO y sin rechazar la posibilidad de que se destituyera a Ulises Ruiz, evitar que la opinión pública asociara al partido y a López Obrador con las acciones radicales que realizaba el movimiento. El gobierno federal enfrentó un dilema todavía más agudo: por un lado parecía resuelto a impedir que un movimiento social (radical, por añadidura) lograra la destitución de un gobernador; por el otro, no quería quedar como un defensor de Ulises Ruiz y de hecho, debido a su alianza con el grupo de Elba Esther Gordillo, estaba interesado en su

destitución. El PRI, ya sin la participación de Gordillo y sus principales aliados, asumió de forma inequívoca la defensa de Ulises Ruiz.²⁰

Dos acontecimientos ilustran bien cómo operaron en la práctica esas estrategias. Uno de ellas fue la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, ocurrida, después de muchos retrasos, el 29 de octubre. Luego de sufrir una aparatosa derrota el 2 de noviembre, cuando intentó tomar la Ciudad Universitaria de Oaxaca, la PFP se mantuvo casi pasiva por tres semanas antes de lanzarse seriamente a reprimir el movimiento. El otro acontecimiento ilustrativo fue el fracaso del intento por “declarar desaparecidos” los poderes estatales, una facultad que la constitución mexicana le otorga al senado y que implica el nombramiento de nuevas autoridades. En la discusión, que se dio a mediados de octubre, las posiciones del PRD y el PRI estuvieron claras desde el principio (respectivamente, a favor y en contra de declarar desaparecidos los poderes). El PAN, en cambio, se mantuvo ambiguo, aunque después de muchas vacilaciones se alineó con el PRI. Sin embargo, el gobierno federal y el PAN siguieron tratando de lograr la renuncia de Ulises Ruiz. Esta actitud vacilante se terminó a finales de noviembre, cuando se acercaba la toma de posesión de Felipe Calderón y el PAN necesitaba asegurar el apoyo del PRI. Ese fue precisamente el antecedente de la ola represiva iniciada el 25 de noviembre. Ese día, durante la séptima “megamarcha” de la APPO, la PFP se enfrentó a los manifestantes, destruyó las barricadas y, en coordinación con la policía estatal, comenzó una serie de detenciones por toda la ciudad. En total, 149 detenidos fueron remitidos a diversos penales de Oaxaca y de dos estados del norte de la república. Días

²⁰ Elba Esther Gordillo fue expulsada del PRI el 13 de julio, entre otras cosas, por “apoyar a candidatos de partidos distintos” (*El Universal*, 14 de julio de 2006).

después fue capturado el líder más visible de la organización, Flavio Sosa, junto con otros dirigentes importantes.

Además del apoyo, vacilante pero a la postre decisivo, que Ulises Ruiz recibió del gobierno federal, el otro factor principal que lo ayudó a sortear la crisis fue el respaldo de varios sectores sociales oaxaqueños. Los principales integrantes de este bloque (cuya primera “contramarcha”, con varias decenas de miles de asistentes, se dio el 21 de junio) fueron los burócratas, campesinos e indígenas movilizados por el PRI, y las clases altas del estado. La principal voz pública de estos grupos fue “Radio Ciudadana”, una estación clandestina que se dedicó a azuzar a la población contra la APPO. Por momentos, el enfrentamiento entre los dos grupos pareció volverse directo, amenazando con transformarse en un conflicto civil. Grupos armados sin uniformes, que según la APPO estaban parcialmente conformados por policías, cometieron varios de los asesinatos producidos durante el conflicto.²¹ Este parece ser un rasgo común de los conflictos populares-electorales, tal como se les definió al principio: renuentes a usar abiertamente la fuerza pública, las autoridades recurren a grupos irregulares para reprimir las protestas e instigan, o por lo menos toleran, el enfrentamiento entre sectores sociales.

Conclusión

La firme represión ejercida por policías federales y estatales, el cansancio provocado por casi seis meses de movilizaciones continuas, la obvia imposibilidad de lograr la destitución del gobernador en el nuevo contexto político, las divisiones que surgieron dentro de la APPO una vez que esta demanda perdió su capacidad para aglutinar a los diferentes grupos: todos esos factores debilitaron seriamente el movimiento y lo pusieron

²¹ Estos grupos fueron acusados de cometer el asesinato que causó mayor escándalo durante el conflicto y que fue el detonante de la intervención de la PFP: el del periodista estadounidense Bradley Roland Will, el 27 de octubre.

a la defensiva.²² Al mismo tiempo, la insatisfacción de las demandas sociales y políticas que le dieron origen, la supervivencia de las organizaciones que participaron en él, la experiencia que adquirieron los líderes altos y medios en todos estos meses de protestas, y la polarización de la sociedad oaxaqueña prácticamente garantizan la capacidad del movimiento para sobrevivir, en estado más o menos latente, en espera de otra coyuntura favorable.

Está en la naturaleza de los movimientos sociales recurrir a formas de lucha institucionalmente poco aceptadas, presionar los límites de lo social y políticamente permitido (Tarrow, 1998). Y es propio de las instituciones políticas dejarse llevar por la inercia, oponerse a la inclusión de nuevas demandas, nuevos actores y nuevas formas de participación (Pierson, 2004). Aun así, conviene enfatizar dos rasgos que le dan un carácter distintivo a las movilizaciones analizadas aquí y que revelan aspectos cruciales del régimen político al que se enfrentaron.

El más visible es la tensión entre las demandas sociales y la política electoral. Discutible como fue, en una sociedad menos polarizada la elección de Ulises Ruiz le hubiera dado una legitimidad suficiente para mantenerse en el gobierno sin mayores sobresaltos. Un proceso de democratización menos vacío de contenidos sociales como el que ocurrió en México en los últimos años habría intentado, de forma razonablemente convincente, atenuar las inequidades de las que es víctima una parte muy grande de la sociedad oaxaqueña. Eso le hubiera restado base social a los líderes y activistas más radicales.

²² Las divisiones entre un sector más proclive a las movilizaciones por “vías institucionales” y otro inclinado a las protestas más radicales ya habían sido visibles en el Congreso Constitutivo (véase *La Jornada*, 13 de noviembre de 2007), pero se acentuaron a principios de 2007, especialmente con respecto a la decisión de participar o no en las elecciones locales de agosto. Para conocer los puntos de vista de los propios implicados en la polémica, véase Gómez Ramírez, 2007 y de Castro Sánchez, 2007.

El segundo rasgo es la actitud de la élite política: en lugar de buscar decididamente una salida negociada al conflicto o enfrentar de manera unificada el desafío “antisistémico”, los gobernantes y líderes partidistas aprovecharon el movimiento para golpearse mutuamente. Eso contribuyó no sólo a complejizar aún más el conflicto oaxaqueño sino a enrarecer el proceso electoral, cuyo resultado fue sumamente cuestionado.

El destino de la APPO es incierto. Pero la poca disposición de la élite para unirse en defensa de las reglas democráticas y la tensión entre las demandas sociales y la competencia electoral parecen ser rasgos duraderos del régimen político mexicano. Eso, en un país con graves carencias y tensiones socioeconómicas, prácticamente garantiza la recurrencia de movilizaciones populares-electorales como las que conmovieron a Oaxaca en 2006.

Referencias

- Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. 2006a. “Qué es la APPO?”. Disponible en línea en: <http://www.asambleapopulardeoaxaca.com>
- . 2006b. “Congreso constitutivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Resumen general de los resultados de las mesas de trabajo”. 13 de noviembre.
- Bautista Martínez, Eduardo. 2006. “Oaxaca: descomposición del régimen y articulación de resistencias”. *Memoria*, núm. 214 (diciembre): 5-10.
- Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). 2007a. *Informe sobre los hechos de Oaxaca*. Barcelona: CCIODH.
- . 2007b “Añadidos y correcciones al listado de personas muertas a lo largo del conflicto de Oaxaca”. Boletín de prensa núm. 17. Barcelona, 23 de marzo.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 2007. *Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos sucedidos en la Ciudad de Oaxaca a partir del 2 de junio y hasta el 31 de enero de 2007*. México: CNDH.
- Consejo Nacional de Población (CONAPO). 2001. *Índices de marginación, 2000*. México: CONAPO.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 2006. “Cifras sobre la evolución de la pobreza en México”. Comunicado 001/2006. Disponible en línea en: www.sedesol.gob.mx

- De Castro Sánchez, Sergio. 2007. "Táctica e ideología: La APPO y la tentación electoral". *La haine*, 16 de febrero. Disponible en línea: <http://www.lahaine.org>.
- Frente Popular Revolucionario (FPR). S/f. "Declaración de principios". Disponible en línea: <http://fprweb.tripod.com/>
- Gómez Ramírez, Víctor Manuel. 2007. "Guerra sucia y reorganización del movimiento oaxaqueño". *El Socialista*, núm. 322. Disponible en línea: <http://www.movimientoalsocialismo.com.mx/>
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2005. *II Censo de Población y Vivienda*. México: INEGI.
- López Bárcenas, Francisco. *Legislación y derechos indígenas en México*. México: CDRSSA-Cámara de Diputados.
- Pierson, Paul. 2004. *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis*. Princeton: Princeton University Press.
- Regino, Adelfo. 2006. "APPO: el arcoiris oaxaqueño". *La Jornada*, 18 de noviembre.
- Tarrow, Sidney G. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Segunda edición. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP). 2006. "Comunicado". 6 de noviembre. Disponible en línea: <http://www.cedema.org/ver.php?id=1629>.
- Tilly, Charles. 2003. *Contention and democracy in Europe, 1650-2000*. Nueva York : Cambridge University Press, 2003.
- Tocqueville, Alexis de. 1986. *De la démocratie en Amérique, Souvenirs, L'Ancien régime et la révolution*. Paris: Robert Laffont.
- Trotsky, Leon. 1980. *History of the Russian Revolution*. 3 vols. Nueva York: Pathfinder.
- Union de la Juventud Revolucionaria de Mexico (UJRM). S/f. "Estatutos". Disponible en línea en: <http://www.ujrm.mx.kz/>
- Vergara, Rosalía, José Gil Olmos y Pedro Matías. 2007. "La APPO por dentro". *Proceso* 1566 (28 de noviembre).